



NÚMERO 041

SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025

RADAR LATAM 360

Dr. Daniel Zovatto

Presidente de LATAM ASESORÍA ESTRATÉGICA 360

Director-Editor de Radar Latam 360

EDITORIAL



Hacia una nueva visión de políticas de desarrollo productivo: cómo escapar de la trampa del bajo crecimiento en América Latina y el Caribe

Por José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

RADAR LATAM 360 desea expresar su especial agradecimiento a José Manuel Salazar-Xirinachs, por su riguroso artículo exclusivo para el editorial de este sábado 18 de octubre de 2025.

Quien conozca mínimamente la historia reciente de América Latina y el Caribe recordará la llamada “década perdida” de los años ochenta, cuando el ingreso per cápita de la región retrocedió en medio de una profunda crisis económica cuyas consecuencias sociales marcaron de manera dramática a nuestros países.

Lo que muchos parecen ignorar es que la región acaba de atravesar una segunda década perdida: entre el año 2014 y el año 2023, el crecimiento del PIB per cápita de América Latina y el Caribe fue nulo. El impacto social no fue tan profundo como en el pasado, en parte gracias a políticas sociales exitosas, pero las noticias no son buenas: la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la generación de empleo, el desarrollo humano -rubros en que la región había registrado avances considerables desde los noventa- se estancaron a partir del 2014 como consecuencia del bajo

dynamismo de la economía. Y el resultado no puede atribuirse al choque pandémico, que por supuesto empeoró las cosas, porque la contracción de 6% en el crecimiento promedio de la región en el 2020 fue seguida de un efecto rebote de la misma magnitud en el 2021.

El riesgo ahora es que la región esté ya atravesando, sin estar plenamente consciente, una tercera década perdida. En promedio la región está creciendo a tasas cercanas al 2%, precisamente el crecimiento bajo que caracterizó a la primera década perdida.

La preocupación va más allá de consideraciones economicistas: el pobre desempeño económico dificulta, y en ocasiones imposibilita, la consecución de múltiples objetivos de política pública. Es, al final del día, un obstáculo inmenso al desarrollo. Es por eso que en la CEPAL hemos venido insistiendo en que la baja capacidad para crecer es una de las trampas del desarrollo de América Latina y el Caribe y que es necesario que la región logre activar un nuevo ciclo de crecimiento alto, sostenido, sostenible e inclusivo.

Salir de la trampa de baja capacidad para crecer requiere una profunda transformación productiva que promueva la modernización, la diversificación y la generación de cambios estructurales positivos para superar el estancamiento de la productividad y del crecimiento económico. Pero este cambio no ocurrirá por inercia; depende de políticas deliberadas, coordinadas y sostenidas que convoquen a gobiernos, empresas, academia y sociedad civil en torno a un propósito común: transformar y dinamizar la estructura productiva de la región.

El nuevo entorno internacional y nuevas condiciones geopolíticas hace aún más urgente la tarea. La “weaponización” de la interdependencia, que incluye aranceles y varios otros instrumentos de intervención estatal, están produciendo una rápida reconfiguración del comercio, los flujos de inversión y las cadenas globales de valor. Y están creando el imperativo, no solo para América Latina y el Caribe, sino para muchos países del mundo, de replantear y diversificar mercados y alianzas. A esto se suman las presiones que surgen de la emergencia climática y de la revolución tecnológica, en particular la inteligencia artificial y la automatización. En un contexto internacional en el que las oportunidades externas de dinamismo están fuertemente determinadas por la rivalidad geopolítica, el crecimiento de nuestras economías depende no solo de las políticas de desarrollo productivo en sectores dinamizadores específicos, sino de que estas estén basadas en una comprensión y prospección del cambiante mapa de oportunidades. Esto es cierto de los minerales estratégicos, los servicios modernos, los productos agrícolas, los dispositivos médicos y de innumerables otros sectores.

La nueva visión de políticas de desarrollo productivo es algo muy diferente no solo de las políticas industriales de hace medio siglo, sino incluso de algunos tipos de política industrial implementadas hoy día por países avanzados. Se trata ahora de desplegar y coordinar un conjunto de instrumentos e instituciones que permitan modernizar la producción, elevar la productividad e impulsar la innovación en todos los sectores de la economía, aunque la necesidad de priorizar es ineludible. No son solo políticas industriales, porque Industria 4.0 y la revolución digital y de IA hoy día involucran también a los servicios modernos y a la agricultura moderna. Nuestro enfoque no pone ni a los subsidios ni a los aranceles por delante, sino que pone prioriza a la gobernanza y la colaboración entre los actores clave del desarrollo productivo: gobiernos, empresas, sector académico y actores en los territorios.

Esta es la visión que la CEPAL ha venido promoviendo a partir del lanzamiento, desde 2024, de una nueva publicación bandera: el Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe.

Para ayudar a los países a emprender esta tarea indispensable, la semana pasada lanzamos la edición 2025 del Panorama, en que exploramos a profundidad cuatro áreas fundamentales para la transformación productiva: la productividad; la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI); la articulación productiva, y las políticas productivas verdes.

El bajo crecimiento de la productividad es la principal debilidad estructural detrás de la baja capacidad para crecer de América Latina y el Caribe. Entre 2014 y 2024, la productividad laboral por hora trabajada en la región cayó un 3,3%, mientras que en el mundo aumentó un 21,6%. De hecho, por primera vez en la historia reciente, a partir del 2016 la productividad media de la región ha pasado a ser y mantenerse debajo del promedio global. Revertir esta tendencia requiere promover sectores dinámicos, fortalecer las capacidades de innovación y aprendizaje, apoyar a empresas de todos los tamaños y reducir las disparidades territoriales.

Por otra parte, la región invierte apenas el 0,6% del PIB en investigación y desarrollo, frente a más del 2% en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea. Esto es a todas luces insuficiente. Pero la eficacia de **las políticas de CTI** va más allá de los montos de inversión: depende de la calidad de las estrategias, y de la solidez institucional y la coherencia entre instrumentos y objetivos. Invertir en CTI debe convertirse en una palanca para transformar la estructura productiva y aumentar la productividad. Se requiere invertir más, sin duda, pero se requiere también invertir mejor.

La articulación productiva es la capacidad de coordinación y cooperación entre empresas, gobiernos, sector académico y otras instituciones y actores en torno a objetivos productivos comunes en sectores específicos. El éxito de estos mecanismos de coordinación se confirma en los cientos de casos registrados en la Plataforma de Iniciativas Clúster y Otras Iniciativas de Articulación Productiva en América Latina y el Caribe. Escalar la articulación productiva es clave para construir ecosistemas competitivos e innovadores y reforzar los vínculos que multiplican el impacto de las políticas de desarrollo productivo.

Por último, la transición energética es tanto un imperativo ambiental, como una oportunidad para redefinir la base productiva de la región a partir de **crecimiento verde e inclusivo**. Invertir en tecnologías limpias, industrias verdes y modelos de negocio inclusivos permite crear trabajo decente, ampliar la formalidad y reducir las desigualdades.

En la CEPAL estamos convencidos de que salir de la trampa de la baja capacidad para crecer y evitar una tercera década pedida es posible, pero solo a partir de escalar las políticas de desarrollo y transformación productiva bajo la nueva visión que hemos venido señalando, apostando a sectores dinamizadores específicos y con una profunda comprensión y prospectiva de las nuevas realidades de la economía y la geopolítica internacional.

Radar Político



Perú: La generación Z vuelve a las calles, esta vez contra el Gobierno interino de Jerí. El descontento acumulado, especialmente entre jóvenes de la generación Z, ha estallado en Perú en forma de movilizaciones masivas contra el gobierno interino de José Jerí, al que acusan de representar la continuidad del pacto político que sostiene la corrupción y la impunidad. Lo que comenzó como marchas pacíficas en Lima y otras ciudades -con expresiones artísticas, girasoles como símbolo de paz, colectivos universitarios y el apoyo de figuras culturales como Susana Baca- derivó en enfrentamientos frente al Congreso, donde un grupo se enfrentó a la policía, encendió barricadas y dejó decenas de heridos. Los manifestantes exigen la dimisión de Jerí, una nueva mesa directiva en el Congreso, medidas contra la extorsión y el sicariato, y el fin del “pacto mafioso” entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobierno acusa a “grupos radicalizados” de distorsionar una protesta legítima con violencia, mientras la Defensoría del Pueblo alerta sobre el uso excesivo de gases lacrimógenos y el cierre de accesos a las marchas. Jerí intenta proyectar autoridad y control ante la crisis, en un contexto de inseguridad y descrédito institucional que siguió a la destitución exprés de Dina Boluarte la semana pasada. Sin embargo, las movilizaciones recuerdan las protestas juveniles de 2020 que forzaron la renuncia del entonces presidente interino Manuel Merino, y podrían tener un desenlace similar si el Ejecutivo no logra estabilizar su débil gobierno.

🌐 Marcha de Generación Z contra nuevo presidente de Perú deja un fallecido y más de 100 heridos

Perú: La generación Z -jóvenes menores de 30 años- se ha convertido en la protagonista de las protestas que hoy sacuden al país, cansada de la corrupción, la precariedad y un sistema político que consideran podrido. Movilizados a través de redes sociales y sin líderes visibles, exigen un cambio real y denuncian los abusos policiales sufridos durante las manifestaciones. El detonante fue la reforma que buscaba obligar a los trabajadores independientes a aportar a los fondos de pensiones, pero su reclamo va mucho más allá: es una demanda por justicia, dignidad y oportunidades. Representan más del 25% del electorado y, con su energía y creatividad, están desafiando a una clase política que durante décadas los ignoró. Con consignas como “no nos representan” y “nuestro futuro no se vende”, los jóvenes peruanos han logrado devolver el debate político a las calles. Su movimiento, horizontal y espontáneo, simboliza un quiebre generacional frente al inmovilismo del poder. Tras la caída de Dina Boluarte, el país enfrenta un nuevo ciclo de incertidumbre. El presidente interino, José Jerí, carece de respaldo y las movilizaciones exigen no solo su renuncia, sino también un proceso de limpieza institucional antes de las elecciones de abril. Aunque el epicentro de las protestas es Lima, el malestar se expande lentamente hacia otras regiones. Los símbolos juveniles -calaveras, anime, estética pop- reflejan una identidad colectiva que combina rebeldía y esperanza. La generación Z peruana ya no teme enfrentarse al poder: su pulso desafiante podría marcar el inicio de una transformación profunda en la política del país. Su irrupción representa una bocanada de aire fresco en una democracia agotada, y un recordatorio de que la legitimidad solo puede construirse con participación y transparencia.

🌐 El pulso de los jóvenes amenaza al poder en Perú

Perú: El gobierno interino prepara la declaración de un estado de emergencia en la zona metropolitana de Lima ante el incremento sostenido de la violencia y los homicidios. La medida incluiría el despliegue de fuerzas militares en las calles y la posible restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión. El primer ministro, José Jerí, señaló que el plan busca responder con firmeza a la crisis de seguridad y que se acompañará de un paquete de acciones concretas para reforzar la presencia del Estado y mejorar la capacidad policial. Aunque aún no ha sido formalizada, la iniciativa genera un intenso debate sobre sus alcances y efectos. La decisión se produce en un contexto de alta tensión tras el ataque armado a un autobús y los disturbios registrados durante las recientes protestas nacionales, que dejaron un muerto y más de un centenar de heridos. La muerte del joven artista Eduardo Ruiz se convirtió en un símbolo de la indignación social y de la desconfianza hacia las autoridades. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como indispensable para restablecer el orden público, juristas y organizaciones civiles advierten sobre los riesgos de abusos y de un uso desproporcionado de la fuerza. Más de diez millones de limeños se verán directamente afectados por esta decisión, cuyo impacto podría marcar el rumbo del frágil gobierno interino.

🌐 El Gobierno interino de Perú prepara un estado de emergencia en Lima ante la crisis de violencia

Perú: El presidente interino José Jerí enfrenta crecientes tensiones tras presentar su nuevo gabinete en un momento crítico, apenas cinco días después de asumir el cargo. Su gestión ha sido cuestionada por los bruscos cambios ministeriales, la falta de respaldo político y las críticas hacia la legitimidad del Ejecutivo, lo que lo obliga a gobernar en medio de un clima de incertidumbre y desconfianza. Las principales críticas se centran en la improvisación de su equipo y en la ausencia de un plan claro para responder a la crisis social que atraviesa el país. Los cargos designados han generado polémica, especialmente el del primer ministro Ernesto Álvarez Miranda, conocido por sus declaraciones confrontacionales hacia los movimientos sociales. Jerí ha intentado moderar las tensiones asegurando que respeta el derecho a la protesta y llamando al diálogo, mientras prepara un operativo policial frente a la gran manifestación convocada para exigir su salida. En la víspera de esa marcha, diversos sectores sindicales, estudiantiles y políticos han coincidido en denunciar un “vacío de liderazgo” y un Ejecutivo sin rumbo, mientras crece el temor a nuevos episodios de violencia y represión en las calles. El descontento popular se expande por todo el país y algunos legisladores ya han comenzado a promover iniciativas para acortar su mandato interino, ante una situación que amenaza con derivar en una nueva crisis institucional.

🌐 José Jerí presenta su Gabinete en la víspera de una protesta nacional que reclama su renuncia c...

Perú: La destitución exprés de Dina Boluarte por parte del Congreso -invocando la “incapacidad moral permanente”- y la rápida asunción de José Jerí sumergen a Perú en una nueva fase de crisis institucional, a solo 6 meses de sus elecciones generales, marcada por la fragilidad del relevo político y la opacidad en las motivaciones de quienes ejercen el poder. Desde hace años, el país vive una espiral de inestabilidad: ocho presidentes en diez años, congresos disueltos y herencias autoritarias que erosionan la fe ciudadana. La designación de Jerí, acusado de violación, revela hasta qué punto el sistema político opera al margen de legitimidad, mientras la desconfianza hacia jueces, congresistas y autoridades se vuelve absoluta en las encuestas. La política -desprestigiada, asaltada por conflictos internos y convertida en botín- parece haberse divorciado de la ciudadanía, que se resigna entre la protesta y la indiferencia. En ese círculo vicioso, la solución no está en cambiar nombres, sino en refundar reglas, abrir espacios reales de representación y

reconstruir la confianza entre el Estado y la población si es que el país quiere evitar el derrumbe democrático. La pregunta que debe hacerse el país andino, no es ya la que hiciera Mario Vargas Llosa hace unas décadas (Conversación en La Catedral) “en qué momento se jodió el Perú” sino “hasta donde puede seguir jodiéndose el Perú sin arriesgar perder su democracia”.

⊕ Perú inicia una nueva era de inestabilidad y caos tras la destitución exprés de Dina Boluarte

Chile: El presidente Gabriel Boric acusó públicamente al gobierno de Venezuela de estar vinculado con el secuestro y asesinato del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024. Según la investigación de la fiscalía chilena, Ojeda -quien se había refugiado en Chile tras oponerse al régimen de Nicolás Maduro- fue secuestrado por un comando que se hizo pasar por agentes policiales y hallado días después enterrado bajo cemento en la comuna de Maipú. La fiscalía sostiene que el crimen habría sido encargado por el gobierno venezolano a través de la organización criminal Tren de Aragua. Las declaraciones de Boric generaron un fuerte choque diplomático entre Chile y Venezuela, con el fiscal general venezolano Tarek William Saab rechazando las acusaciones y cuestionando la credibilidad del mandatario chileno. Mientras tanto, Chile advierte que podría acudir a la Corte Penal Internacional si se confirma la implicación estatal venezolana en el asesinato, lo que convierte este caso en un foco significativo de tensión bilateral y de debate sobre la impunidad del crimen organizado transnacional en América Latina. El caso Ojeda ha commocionado a la opinión pública chilena y reavivado el debate sobre la presencia del crimen organizado extranjero en el país. Diversos sectores políticos han respaldado la postura de Boric, señalando la necesidad de proteger la soberanía y garantizar justicia para las víctimas de persecución política. Sin embargo, otros advierten que la acusación directa podría escalar el conflicto diplomático y afectar la cooperación regional en materia migratoria y de seguridad.

⊕ Boric asegura que Gobierno de Venezuela está vinculado con el asesinato del exmilitar venezola...

Colombia-México: Los mandatarios Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum anunciaron que no asistirán a la próxima Cumbre de las Américas, prevista para el 4 y 5 de diciembre en República Dominicana, en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Petro afirmó que “el diálogo no comienza con exclusiones” y vinculó su decisión con lo que considera una escalada de agresiones en el Caribe derivadas de las operaciones militares de Estados Unidos. Sheinbaum, por su parte, sostuvo que no comparte la decisión de marginar a ningún país del continente y que su ausencia también responde a la necesidad de atender las emergencias provocadas por las inundaciones en México. Ambos mandatarios refuerzan así una posición común frente a Washington, apostando por una política exterior latinoamericanista y de autonomía regional. La ausencia de dos de los principales líderes progresistas de la región representa un duro golpe diplomático para la cumbre, que ya enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad y capacidad de convocatoria. En contraste, otros gobiernos, como los de Brasil, Uruguay y Chile, han confirmado su participación, buscando mantener abiertos los canales de diálogo hemisférico pese a las diferencias ideológicas. El debate sobre la exclusión de países y la forma de construir un espacio de cooperación sin vetos vuelve a poner en el centro las tensiones entre Estados Unidos y América Latina.

⊕ Petro y Sheinbaum no asistirán a la Cumbre de las Américas en República Dominicana | En rech...

Cuba: El reconocido líder opositor José Daniel Ferrer García salió de prisión para partir al exilio en Miami tras un pacto con el Gobierno de Díaz-Canel que aceptó su excarcelación a

cambio de abandonar el país. Según informes, Ferrer llevaba años sufriendo abusos, hostigamientos y condiciones extremas en la cárcel de Mar Verde, y fue su entorno -familia, presión internacional y su propio desgaste físico- lo que lo llevó a finalmente aceptar la salida forzada que había rechazado previamente. En una carta manuscrita enviada desde prisión, afirmó que la presión sobre él y su familia se había vuelto insopportable, de modo que “ante las constantes manifestaciones de la policía política … terminé aceptando la salida al exilio”. Su liberación llega después de intensas gestiones diplomáticas y denuncias de organismos internacionales que exigían su libertad inmediata. Ferrer partió junto a su familia en un vuelo desde Santiago de Cuba hacia Miami, donde fue recibido discretamente y se dirigió a la sede de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Muchos lo ven como una derrota para la disidencia interna, pues su presencia en la isla era un símbolo de resistencia frente al régimen. Su partida deja un vacío político entre quienes lo veían como figura clave en la oposición democrática y alimenta el debate sobre las nuevas estrategias de resistencia desde el exilio. Mientras tanto, el Gobierno cubano intenta proyectar una imagen de apertura humanitaria, aunque su decisión refuerza la política de expulsar a sus críticos más incómodos. El caso de Ferrer vuelve a poner bajo la lupa la situación de los presos políticos en Cuba y la fragilidad de los derechos humanos en la isla.

✉ José Daniel Ferrer García sale de una prisión en Cuba directo al exilio en Miami

Colombia: El Gobierno de Gustavo Petro prepara una ofensiva política para blindar sus reformas en salud y pensiones frente a los crecientes obstáculos institucionales y el rechazo en el Congreso. Propone eliminar el sistema actual de EPS (Entidades Promotoras de Salud), creado en 1993, para transformarlas en entidades gestoras encargadas solo de auditar los gastos, mientras el Estado asume un rol central en la provisión de servicios. El Ejecutivo busca así recuperar el control público del sistema y reducir los márgenes de intermediación privada que, según Petro, han profundizado la desigualdad. La estrategia incluye la movilización de ministros, sindicatos y organizaciones sociales en defensa del proyecto. La reforma pensional también enfrenta un escenario complejo: la Corte Constitucional debe determinar si cumple con los requisitos legales para entrar en vigor tras detectarse vicios en su aprobación legislativa. Aunque el gobierno cuenta con un respaldo limitado en el Congreso, prepara recursos jurídicos y una ofensiva comunicacional para evitar su anulación. Petro defiende que ambas reformas son pilares de su promesa de justicia social y redistribución del ingreso, mientras la oposición advierte sobre riesgos fiscales y una mayor burocratización del Estado. El desenlace marcará el pulso político del segundo tramo de su mandato y su capacidad real de sostener la agenda transformadora que lo llevó al poder.

✉ El Gobierno de Petro prepara la ofensiva para proteger sus reformas de salud y pensional

México: En su primer mes de funcionamiento, el nuevo Poder Judicial federal vive una crisis interna marcada por el caos organizativo, el miedo y la pérdida de rumbo institucional. El proceso de renovación tras la elección de jueces y magistrados ha estado acompañado de despidos masivos, renuncias forzadas y un clima de vigilancia constante sobre el personal, incluso en redes sociales. Funcionarios denuncian presiones, autocensura y un ritmo de trabajo extenuante, con audiencias improvisadas, sesiones plenarias diarias y resoluciones tomadas sin el debido análisis. Se han revertido criterios jurídicos previos sin debate ni fundamentación, mientras áreas clave del sistema operan sin dirección ni planificación. Muchos trabajadores describen un ambiente de tensión y agotamiento que erosiona la confianza y paraliza el funcionamiento del aparato judicial. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) enfrenta desorganización y vacíos de liderazgo: no hay claridad sobre nombramientos ni lineamientos de operación, y numerosas oficinas funcionan sin responsables

definidos. La falta de experiencia de varios jueces electos, junto con la sobrecarga laboral, ha generado decisiones erráticas y un deterioro acelerado de la calidad de las sentencias. En tribunales de distrito y colegiados, los procesos están detenidos y el personal técnico actúa sin orientación clara. Dentro de la institución crece el temor de que el Poder Judicial se transforme en un instrumento político antes que en un garante de justicia. La incertidumbre domina el ambiente, y muchos prevén que la crisis podría profundizarse si no se restablece pronto la estabilidad y la autonomía judicial.

⊕ El primer mes del nuevo Poder Judicial desde dentro: caos, represalias y obsesión por el escrutin...

Venezuela-Noruega: El régimen de Nicolás Maduro ordenó el cierre de las embajadas de Venezuela en Noruega y Australia pocos días después de que la opositora María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz. El gobierno justificó la decisión como parte de una “reorganización estratégica” y una “redistribución de recursos diplomáticos hacia países aliados del sur global”, aunque el gesto fue interpretado en el exterior como una clara represalia política. Desde Oslo, la cancillería noruega lamentó la decisión y confirmó que el cierre fue abrupto y sin comunicación previa. Con ello, Venezuela pierde representación en un país que fue clave en los intentos de mediación y diálogo entre el chavismo y la oposición durante los últimos años. El movimiento profundiza el aislamiento diplomático del régimen, que en las últimas semanas ha endurecido su discurso contra las potencias occidentales y ha buscado estrechar vínculos con Rusia, Irán y varios países africanos. La decisión también supone un mensaje interno: reafirmar la narrativa de soberanía y resistencia frente a lo que Caracas considera una “ofensiva internacional” promovida por la oposición y Washington. Sin embargo, diplomáticos retirados advierten que la política exterior venezolana se ha vuelto reactiva y emocional, debilitando su capacidad de interlocución global. El cierre de la embajada en Noruega simboliza no solo una ruptura política, sino también el final de una etapa en la que aún existía margen para la diplomacia y el diálogo.

⊕ El régimen de Maduro ordenó el cierre de la embajada de Venezuela en Noruega tras el Nobel d...

Venezuela: María Corina Machado declaró que solo podrá viajar en diciembre a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz si Nicolás Maduro deja el poder, pues considera que su presencia impide que “Venezuela sea libre”. Actualmente vive oculta y con fuertes medidas de seguridad, afirmando que no puede salir del país por amenazas directas contra su vida mientras el régimen se mantenga. Su mensaje, difundido por redes sociales y voceros de su equipo, busca reafirmar su compromiso con la resistencia pacífica y con la lucha por una transición democrática. El anuncio coincide con la crisis diplomática provocada por el cierre de la embajada venezolana en Noruega, país que ha sido mediador clave en los intentos de negociación. Su condición de galardonada con el Nobel aumenta la presión sobre el gobierno chavista y reaviva el debate sobre el futuro político del país. Machado, que simboliza la oposición interna más desafiante frente al poder, ha insistido en que su lucha no es por reconocimientos, sino por la libertad y la justicia. Diversos gobiernos y organismos internacionales han expresado su apoyo y pedido garantías para su seguridad. La ceremonia de entrega del Nobel podría convertirse en un punto de inflexión simbólico para Venezuela: un contraste entre la legitimidad moral de la oposición y el aislamiento internacional del régimen de Maduro.

⊕ María Corina Machado dijo que podrá ir a recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo sólo si Nicolá...

Radar Electoral



Bolivia: El camino a un inédito, histórico y muy tenso balotaje este domingo 19 de octubre. El país se encamina este domingo hacia una segunda vuelta sin precedentes en su historia democrática, en la que los ciudadanos deberán decidir entre dos candidatos que encarnan visiones económicas opuestas para sacar al país de una crisis marcada por la inflación, la escasez de divisas y combustible y el malestar social. En el cierre de campaña, Rodrigo Paz -senador por el Partido Demócrata Cristiano- que logró el primer lugar en la primera vuelta, insistió en su llamado a “cuidar el voto” y denunció la existencia de “fuerzas que no quieren un cambio” en Bolivia, al tiempo que reafirmó su confianza en la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Paz ha promovido un proyecto que denomina “Capitalismo para Todos”, con el que pretende formalizar la economía informal, reducir la burocracia, cerrar aduanas corruptas, facilitar la producción nacional y fomentar el comercio mediante tecnologías asequibles. También plantea mantener los programas sociales esenciales, moderar gradualmente los subsidios a los combustibles y priorizar recortes en gastos superfluos, insistiendo en que los ajustes deben ser graduales y no afectar a los sectores más vulnerables. En su mitin final, Paz arremetió contra su rival Jorge Quiroga, a quien acusó de proponer medidas “contradictorias”, y amenazó con acciones legales contra el presidente actual por la gestión de la escasez de divisas y combustibles. Por su parte, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, candidato por la Alianza Libre (derecha conservadora) ha construido su propuesta alrededor de una “terapia de choque” económica con fuerte financiamiento externo. Promete reformas estructurales agresivas para estabilizar la macroeconomía, incluyendo recortes drásticos del gasto público, eliminación de subsidios, privatización o cierre de empresas estatales ineficientes, reorganización del aparato estatal y la búsqueda de un préstamo de 12.000 millones de dólares del FMI u otros organismos. También propone otorgar derechos individuales sobre los recursos naturales -litio y gas incluidos- a través de un fondo mutual, reducir la intervención estatal en minería e hidrocarburos y reorientar la política exterior hacia Estados Unidos y Occidente.

🌐 Elecciones en Bolivia: qué está en juego y por qué son históricas | CNN

Bolivia: El país entró en la cuenta regresiva hacia un balotaje histórico, a solo una semana de la elección del 19 de octubre, Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) y Rodrigo Paz Pereira (PDC) se enfrentaron en un debate decisivo que condensó las tensiones, esperanzas y contrastes de esta contienda. Durante casi dos horas, los candidatos expusieron sus visiones de país con estilos opuestos: Quiroga, apelando a su experiencia y a una imagen de solvencia técnica; Paz, insistiendo en la renovación, el relevo generacional y el cierre de un ciclo político. Fue un intercambio intenso y simbólico, organizado por el Tribunal Supremo Electoral y transmitido por el programa *Yo Elijo*, que marcó el cierre del tramo final de campaña y encendió los ánimos de cara a una votación clave para el futuro político boliviano. Aunque ambos mostraron dominio de sus programas, evitaron responder preguntas de fondo. Paz no precisó las reformas constitucionales que impulsaría ni el tipo de contratos petroleros que promovería; Quiroga tampoco explicó el origen de los fondos para su propuesta de “propiedad popular”. En los mensajes finales, Paz apostó por el discurso del cambio y la “Bolivia del

Bicentenario”, mientras Tuto prometió “traer los dólares, acabar con las colas de gasolina y construir una Bolivia próspera y digital”. Las encuestas confirman una ventaja de Quiroga, con el 44,9% frente al 36,5% de Paz, según Ipsos Ciesmori, pero el resultado sigue abierto: casi un 10% de indecisos podría definir la elección. La contienda, inédita en su forma y trascendencia, enfrenta a la experiencia conservadora de Tuto con la promesa de renovación encarnada por Rodrigo Paz. El miércoles cerrará la campaña y comenzará el silencio electoral antes de un domingo que podría marcar un antes y un después en la historia política del país.

⊕ Debate en Bolivia: la economía dominó una discusión moderada entre Jorge Quiroga y Rodrigo ...

Bolivia: Durante el cierre de campaña en Cochabamba, Rodrigo Paz lanzó una fuerte advertencia contra el presidente Luis Arce, anunciando que de ganar la elección convocaría a los senadores del país a enjuiciarlo. Su discurso buscó empatar movilización social y judicialización del poder político, y añadió que el PDC tendría mayoría en la Cámara alta para impulsar ese proceso. Paz aprovechó su mitin para criticar la gestión del MAS, acusando a Arce de corrupción, incompetencia y de sumir al país en una crisis cambiaria. Además, prometió reformas tributarias, reducción de aranceles y el fin del contrabando como parte de su proyecto de “capitalismo para todos”. Su retórica también apuntó contra su adversario en la segunda vuelta, Jorge Quiroga, a quien calificó de mentiroso, mientras insistía en que Bolivia necesita transformaciones estructurales profundas. En un ambiente polarizado y marcado por el desgaste del oficialismo, Paz buscó capitalizar el voto de protesta y presentarse como la opción del cambio. El acto cerró con miles de simpatizantes coreando consignas de renovación política y con llamados a “recuperar la institucionalidad” del país. Las encuestas anticipan una contienda muy reñida rumbo al balotaje del 19 de octubre.

⊕ Rodrigo Paz amenaza con enjuiciar al presidente Arce en el cierre de campaña en Bolivia

Argentina: Las últimas encuestas publicadas a una semana de las elecciones legislativas muestran una contienda muy reñida entre el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), que lidera con un 36,7% de intención de voto, y el frente peronista opositor Fuerza Patria, que alcanza un 34,8%. Esta diferencia estrecha contrasta con el dominio que Milei exhibía durante el invierno austral, cuando su fuerza tenía una ventaja de hasta diez puntos. Sin embargo, tras la derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires en septiembre, el margen se redujo a apenas dos puntos, revelando un escenario de creciente polarización y desgaste para el oficialismo. El estudio también muestra tendencias significativas en el perfil del electorado. LLA se consolida como la fuerza más apoyada entre los jóvenes de 16 a 24 años, con un 54% de respaldo frente al 18% de Fuerza Patria en ese segmento. En cambio, el peronismo mantiene su fortaleza entre los votantes de 45 a 59 años y entre quienes tienen educación superior, mientras que el espacio libertario predomina entre personas con menor nivel educativo. Además, la imagen del presidente Milei se encuentra en uno de sus puntos más bajos del año, con una brecha de 15 puntos entre opiniones positivas y negativas, lo que podría complicar su capacidad para avanzar en reformas clave si no logra una mayoría en el Congreso.

⊕ Qué dicen las encuestas a una semana de las elecciones legislativas en Argentina

Chile: La ministra Jeannette Jara consolida su liderazgo en la carrera presidencial con un 28% de apoyo (+1 punto), seguida por José Antonio Kast con 23% y Evelyn Matthei con 14% (-1). Más atrás se ubican Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (10%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%). En un escenario de votación inmediata, Jara

alcanzaría 31% frente a 25% de Kast. En segunda vuelta, sin embargo, el panorama se complica para la candidata oficialista: Kast la derrotaría por 11 puntos (47% vs 36%) y Matthei por 12 puntos (46% vs 34%). En expectativas presidenciales, 38% cree que Kast será el próximo mandatario, seis puntos más que Jara, confirmando la fortaleza del líder republicano entre los votantes conservadores. El sondeo también refleja una mejora del clima económico y anímico del país. La aprobación del presidente Gabriel Boric sube a 36% (+3), mientras la desaprobación baja a 61% (-2). Las expectativas positivas sobre el futuro alcanzan 53%, el nivel más alto desde marzo de 2022, y 43% considera que Chile va por buen camino. Mejora la evaluación económica personal y familiar (67%), así como las expectativas de consumo (45%). A seis años del estallido social, persisten sentimientos de rabia (20%) y frustración (19%), aunque también de esperanza (12%). Pese a que la mayoría cree que las demandas del 2019 siguen sin resolverse, un 64% respalda la continuidad de movilizaciones pacíficas y un 82% exige mano dura frente a la violencia, reflejando un país dividido pero más optimista sobre su porvenir.

Jeannette Jara se mantiene líder en primera vuelta con 28% (+1pto), seguida por José Antonio K...

Perú: El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que renunciará este lunes 13 de octubre a las 3:30 p.m. a la Municipalidad de Lima para postular a la presidencia en las elecciones generales de 2026 por Renovación Popular. El anuncio lo hizo en el programa *El Valor de la Verdad*, donde aseguró haber reflexionado profundamente antes de tomar la decisión, incluso durante un viaje reciente a Roma. Tras su dimisión, el teniente alcalde Renzo Reggiardo asumirá el cargo hasta el final del mandato municipal. López Aliaga realizó el anuncio después de presentar su rendición de cuentas 2025, en la que destacó avances en obras, ejecución presupuestal y programas sociales. En el acto fue alentado por simpatizantes, incluidos niños que lo instaron a lanzarse como candidato presidencial. Su salida reconfigura el escenario político nacional y refuerza su estrategia de proyectarse como alternativa conservadora frente al descrédito general de la clase política. Analistas interpretan su decisión como un movimiento calculado para aprovechar su visibilidad y liderazgo entre sectores religiosos y empresariales. El inicio formal de su campaña marcará uno de los primeros pasos en la carrera presidencial de 2026, en medio de una crisis de legitimidad institucional y desconfianza ciudadana.

Rafael López Aliaga renunciará hoy a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la Rep...

Colombia: En las elecciones a Consejos Locales y Municipales de Juventud, que serán la primera prueba electoral rumbo a 2026, los partidos tradicionales han tomado clara ventaja frente a las fuerzas de izquierda. Sumadas las candidaturas inscritas, el Liberal, el Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical concentran cerca del 60 % de los aspirantes en listas partidarias, mientras que el Pacto Histórico y sus aliados figuran con presencia mucho menor. El Partido Liberal lidera con más de 4.300 candidaturas en 721 municipios, apoyado por su extensa red territorial y estructura organizativa. Las juventudes críticas denuncian que estos comicios están siendo cooptados por viejas estructuras clientelares, lo que amenaza con distorsionar su espíritu participativo. Desde el oficialismo se señala que la falta de recursos y la dispersión de movimientos sociales limitan la competencia. Analistas advierten que el predominio de los partidos tradicionales en esta elección podría anticipar una recomposición del mapa político nacional, reforzando su poder territorial y marcando el tono de la carrera presidencial hacia 2026.

Los partidos tradicionales toman ventaja para las primeras elecciones de la carrera al 2026

Brasil: Michelle Bolsonaro, ex primera dama y figura emblemática del bolsonarismo, ha dejado abierta la posibilidad de postularse a la presidencia en 2026 como representante de la derecha dura, aunque afirma que su decisión dependerá de “la misión que Dios quiera confiarle”. En declaraciones enviadas a la AFP, aseguró que cualquier paso político será discutido con su marido, Jair Bolsonaro, a quien definió como “el mayor líder de la derecha en Brasil”. Con un tono marcadamente religioso, la también pastora evangélica ha irrumpido en el debate político en medio de la división dentro del bolsonarismo, donde también suenan los nombres del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y del senador Flávio Bolsonaro como posibles candidatos. La condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado ha debilitado su liderazgo, pero no ha extinguido la influencia de su apellido en la política brasileña. Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumplirá 80 años a fines de octubre, ha insinuado abiertamente que buscará un cuarto mandato en 2026, declarando que “está dispuesto a presentarse a unas cinco elecciones más”. Lula intenta reforzar su conexión con los sectores populares y acercarse al electorado evangélico, tradicionalmente vinculado al bolsonarismo, al tiempo que promueve una narrativa de unidad y grandeza nacional. Sin embargo, enfrenta un Congreso hostil dominado por el llamado Centrão, un bloque pragmático sin ideología definida pero con fuerte poder de negociación.

⊕ Michelle Bolsonaro analiza postularse a presidenta de Brasil: “Será fruto de la oración y de lo que...

Radar Económico-Social



América Latina y el Caribe: El FMI prevé para América Latina y el Caribe un crecimiento de 2,4% en 2025 y 2,3% en 2026, por encima de Europa emergente pero detrás de Asia y partes de África dentro del grupo de economías en desarrollo. El telón de fondo global marca 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026 (avanzadas ~1,5%, emergentes >4%). La inflación regional bajaría a 7,6% en 2025, 5,0% en 2026 y 3,6% en 2030, lo que habilitaría un alivio gradual de tasas, aunque más lento en países con depreciaciones y servicios presionados. El comercio mundial crecería 2,9% en 2025-2026, limitado por fragmentación y aranceles. Riesgos clave para AL: menor inversión, deuda elevada, volatilidad de commodities y tensiones comerciales. El mapa 2025 es heterogéneo: Guyana 10,3% lidera, seguida por Argentina 4,5%, Paraguay 4,4%, Dominica 4,2% y Panamá 4,0%; entre grandes economías, Brasil 2,4% y México 1,0%, con Haití en -3,1%. Por inflación, el escenario apunta a desinflación sostenida, pero con curvas distintas según anclaje fiscal-monetario y cuellos de oferta. Para 2026-2030, el Fondo proyecta 2,3% en 2026 y 2,6% hacia 2030, condicionado a reformas que impulsen productividad, competencia, capital humano e inversión. En síntesis: normalización lenta-crecimiento modesto, inflación en descenso y un contexto externo fragmentado- donde la clave es más inversión, estabilidad fiscal y reglas claras de integración comercial.

⊕ FMI eleva estimación de crecimiento de América Latina para este año, reduce ligeramente la de ...

América Latina y el Caribe: El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a los países de la región a aplicar una consolidación fiscal sostenida para reducir sus elevados niveles de deuda, en un contexto de incertidumbre externa, altos costos de financiamiento y un

diferencial desfavorable entre tasas de interés y crecimiento. Según su informe regional para el hemisferio occidental, las políticas fiscales expansivas adoptadas en los últimos años deben reequilibrarse mediante marcos plurianuales creíbles y reglas fiscales claras que fortalezcan la confianza, reduzcan los costos de endeudamiento y mejoren el clima de negocios. El FMI advierte que esta disciplina fiscal permitirá también una convergencia más rápida de la inflación hacia los objetivos regionales, que se ubicaría en torno al 4,3% en 2025 y al 3,5% en 2026, excluyendo a Argentina y Venezuela. En materia de crecimiento, el organismo proyecta una expansión moderada de 2,4% en 2025 y de 2,3% en 2026, con importantes diferencias entre países. Brasil enfrentará una desaceleración por los aranceles estadounidenses y las políticas internas restrictivas, mientras que México reducirá su ritmo por los ajustes fiscales y la volatilidad de las tasas de interés en EE.UU. Perú y Uruguay también verán una moderación tras su repunte de 2024, a pesar del impulso del turismo y la agricultura. En cambio, Paraguay continuará su crecimiento sostenido y Colombia mostrará una mejora en 2025 antes de estabilizarse en 2026.

El FMI insta a América Latina y el Caribe a implementar una...

América Latina-China: Ambos países están entrando en una nueva etapa en su relación: ya no se trata simplemente de préstamos masivos e infraestructuras emblemáticas, sino de un enfoque más selectivo y estratégico. Aunque el comercio entre ambas regiones sigue en ascenso - con exportaciones latinoamericanas de minerales, soja y litio siendo fundamentales-, la participación de América Latina en los grandes proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) ha disminuido. En el primer semestre de 2025, solo captó poco más del 1% del gasto de construcción de la BRI y solo el 0,4% de la inversión extranjera directa (IED) china. Este cambio obedece en parte a transformaciones internas chinas: menores tasas de crecimiento objetivo, mayor control del riesgo en sus bancos y empresas, y una política exterior más cautelosa. China está priorizando inversiones en sectores de alta tecnología, infraestructura emergente (“nueva infraestructura”), energías renovables y digitalización. En América Latina, eso se traduce en fábricas de vehículos eléctricos, proyectos de transmisión eléctrica y ciudades inteligentes. Las relaciones locales cobran protagonismo: Beijing busca acuerdos en niveles municipales y provinciales, donde puede actuar con menos atritos y mayor flexibilidad. De cara al futuro, el éxito de esta nueva fase dependerá de la capacidad de los países latinoamericanos de establecer marcos legales y regulaciones robustas, promover transferencia tecnológica, atraer inversión de calidad y competir en mercados globales.

Cuba: La isla enfrenta una de las peores crisis de abastecimiento de agua en su historia reciente, con más de tres millones de personas afectadas en todo el país y más de 156.000 solo en La Habana, según datos oficiales. Las autoridades han reconocido que la situación es “muy compleja”, resultado de una prolongada sequía combinada con el deterioro crónico de la infraestructura hidráulica. Tuberías corroídas, bombas averiadas y fugas constantes han colapsado el sistema en muchas zonas. En el oriente del país, algunas comunidades llevan más de cinco meses sin recibir agua, y en Santiago de Cuba se vive la peor sequía de la última década. La desesperación crece entre los ciudadanos, que deben recurrir a pozos o a la compra de agua en el mercado negro para poder sobrevivir. El Gobierno ha prometido inversiones por 5.000 millones de pesos en más de 300 obras hidráulicas, pero los resultados aún no se perciben. Ingenieros y economistas advierten que, sin una reparación integral del sistema de acueductos, las soluciones parciales no resolverán el problema de fondo. A ello se suma la inestabilidad del suministro eléctrico y la escasez de combustible, que impiden mantener operativas las bombas y reducen la presión en las redes. Mientras

tanto, la vida cotidiana se ha vuelto una lucha diaria: familias enteras cargan cubos, improvisan cisternas y racionan cada gota. La crisis del agua refleja, una vez más, el profundo deterioro de los servicios básicos en la Cuba actual.

⊕ Otra crisis desespera a los cubanos: más de tres millones sufren la escasez de agua en la isla

Haití: Más de la mitad de la población enfrenta hoy inseguridad alimentaria aguda, según el Programa Mundial de Alimentos, que cifra en 5,7 millones los haitianos afectados. La tasa de desnutrición infantil se ha duplicado en apenas dos años, pasando del 7% al 14% en menores de cinco años. Los desplazamientos internos por la violencia de pandillas agravan la crisis: 1,3 millones de personas han sido desplazadas, muchas viviendo en albergues improvisados como escuelas o edificios públicos, donde tres de cada cuatro se encuentran en condiciones de hambre extrema. El colapso institucional y la ausencia de un gobierno funcional impiden coordinar una respuesta efectiva, mientras los grupos armados controlan gran parte de la capital y las rutas de abastecimiento. La violencia ha destruido los circuitos de producción y distribución de alimentos, bloqueando caminos, saqueando mercados y extorsionando a los campesinos. En regiones dominadas por las pandillas, la población ya no puede cultivar ni comerciar libremente, y los precios de los alimentos básicos se han disparado. Aunque la ayuda internacional ha logrado aliviar parte del sufrimiento, los recursos son insuficientes y los riesgos de hambruna aumentan cada semana. El PMA solicita 139 millones de dólares para los próximos doce meses, pero la inseguridad impide distribuir los insumos con normalidad.

⊕ El hambre se profundiza en Haití: más de la mitad de la población enfrenta inseguridad alimentari...

Argentina: El gobierno de Javier Milei lanzó una serie de anuncios destinados a calmar a empresarios e inversores en medio de una fuerte turbulencia financiera e incertidumbre política. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la hoja de ruta económica no cambiará pese a la cercanía de las elecciones legislativas, y confirmó el inicio de una “segunda etapa” de reformas estructurales centradas en el mercado laboral y el sistema tributario. El paquete de apoyo financiero de 40.000 millones de dólares anunciado por Estados Unidos busca dar un respiro al país, aunque los mercados mantienen cautela ante la fragilidad política y la falta de una coalición parlamentaria sólida que respalte la agenda reformista. El panorama continúa siendo tenso: los empresarios reclaman previsibilidad, seguridad jurídica y estabilidad institucional para recuperar la confianza. Las principales cámaras empresariales exigen un compromiso concreto con la competitividad y el crecimiento, más allá de las promesas de ajuste fiscal y reducción del gasto. Caputo enfatizó que el gobierno impulsará un régimen laboral más flexible y un esquema impositivo simplificado para atraer inversiones y generar empleo. Sin embargo, los analistas advierten que la viabilidad de estas medidas dependerá del capital político que Milei logre construir en el Congreso y de la capacidad del Ejecutivo para traducir su discurso liberal en resultados económicos tangibles.

⊕ El Gobierno de Milei intenta calmar a empresarios e inversores con la promesa de reformas

Argentina: En septiembre de 2025, la inflación mensual escaló al 2,1%, registrando el valor más alto desde abril y acumulando un 22 +% en lo que va del año, mientras que la tasa interanual alcanzó el 31,8%. Los rubros de vivienda, educación y transporte lideraron los incrementos, con alzas superiores al 3%, mientras que alimentos y bebidas subieron cerca del 1,9%. Este repunte se produce en medio de una depreciación del peso y una coyuntura de alta incertidumbre política y financiera. El anuncio electoral de respaldo de Estados Unidos al gobierno de

Milei, condicionado al desempeño en las legislativas, sumó tensión a los mercados, provocando caídas en bonos y acciones. El FMI, por su parte, revisó sus expectativas y pronosticó una inflación para 2025 del 41,3% junto con un crecimiento de 4,5%, cifras más pesimistas que sus previsiones anteriores. El dato refuerza la presión sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos y debilita la narrativa oficial de control de precios. La nueva aceleración inflacionaria también refleja el impacto del retiro de subsidios a la energía y al transporte, medidas que el gobierno impulsa para corregir desequilibrios fiscales, pero que contienen efectos sociales negativos.

⊕ La inflación en Argentina trepa al 2,1% mensual, el valor más alto desde abril

Bolivia: El país enfrenta uno de los mayores desafíos económicos de su historia reciente tras el agotamiento de sus reservas de gas natural, que cayeron de 16,8 trillones de pies cúbicos en 2009 a solo 4,5 en 2023. La bonanza exportadora que sustentó el modelo de desarrollo durante más de una década se desvaneció, dejando al Estado con menos ingresos, creciente deuda y una economía estancada. La falta de inversión en exploración, el declive productivo y la dependencia de las transnacionales agravaron la crisis, mientras el gobierno busca alternativas para evitar un colapso fiscal. El crecimiento proyectado para este año es uno de los más bajos de la región y las reservas internacionales se reducen rápidamente. En este escenario, los candidatos que se disputan la presidencia coinciden en la necesidad de un nuevo modelo productivo. Las propuestas incluyen diversificar hacia la agricultura, la minería y las energías renovables, así como atraer inversión extranjera mediante reformas liberales. Sin embargo, economistas advierten que sin una estrategia integral, estabilidad política y seguridad jurídica, el país podría repetir los errores del pasado. A la par, los movimientos sociales temen que las nuevas políticas afecten derechos laborales y ambientales. Bolivia se encuentra, así, ante una encrucijada histórica: redefinir su economía sin gas o arriesgarse a una década perdida. ⊕ Bolivia, ante el reto de un nuevo modelo de desarrollo sin gas

Ecuador: El paro nacional convocado por la Conaie se intensifica y hasta la madrugada del 13 de octubre dejó 121 personas detenidas, entre ellas ciudadanos extranjeros y menores de edad. La mayoría de los arrestados son ecuatorianos, aunque también hay venezolanos, colombianos, un argentino y un español que fueron deportados. En varias provincias, especialmente en Quito, se denunciaron enfrentamientos violentos y presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Las manifestaciones, iniciadas contra la eliminación del subsidio al diésel, se extendieron a otros reclamos sociales y políticos que cuestionan la gestión del presidente Daniel Noboa. Los bloqueos de carreteras y marchas masivas paralizaron sectores estratégicos del país, afectando el transporte y el suministro de alimentos. En Quito, los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad se intensificaron frente al Palacio de Carondelet, mientras el Gobierno intenta contener la crisis sin recurrir al estado de excepción. Dirigentes indígenas aseguran que las protestas continuarán hasta lograr un diálogo real y compromisos concretos. En tanto, la tensión aumenta en las calles y el clima político se enrarece, con un país polarizado entre el respaldo a las demandas sociales y el temor a un nuevo estallido como el de 2019. ⊕ Paro Nacional en Ecuador: asciende a 121 el número de detenidos

Panamá: El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su previsión de crecimiento del PIB para Panamá en 4% durante 2025, consolidando al país como uno de los líderes económicos de la región centroamericana. La institución destacó la resiliencia del modelo panameño pese a los choques externos, impulsado por el sector logístico, la recuperación del Canal y la inversión pública. La inflación, proyectada en -0,1%, refleja una estabilidad de precios inusual en el contexto

latinoamericano, lo que refuerza la confianza de los mercados. El informe también señala avances en materia fiscal y una recuperación gradual del empleo formal tras el impacto de la pandemia y el cierre de Cobre Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas celebró el pronóstico, asegurando que el país mantiene un crecimiento equilibrado y sostenible gracias a una política fiscal prudente y a la mejora en la recaudación. No obstante, el FMI advierte que persisten desafíos estructurales, como la desigualdad, la informalidad laboral y la necesidad de diversificar la matriz productiva. Si se mantienen las condiciones actuales y se concretan las reformas pendientes, el crecimiento podría superar el 4,5 % en 2026. Panamá sigue destacando como un hub regional de servicios financieros y logísticos, pero su estabilidad futura dependerá de fortalecer la gobernanza y la transparencia fiscal.

⊕ FMI mantiene en 4% su previsión de crecimiento económico para Panamá en 2025

Uruguay: El Senado aprobó la ley de “Muerte digna”, convirtiendo al país en el primero de América Latina en legalizar la eutanasia a través de una norma integral. La ley permite que una persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, pueda solicitar asistencia médica para poner fin a su vida si padece una enfermedad irreversible o un sufrimiento físico o psíquico insopportable. El texto establece un proceso formal que incluye la evaluación por parte de uno o dos médicos independientes, la firma de una solicitud escrita y la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento. Además, se crea una comisión honoraria de supervisión y se ordena a todos los prestadores públicos ofrecer el servicio. La aprobación de la ley representa un paso histórico en materia de derechos individuales en la región, impulsada por un amplio consenso social y político. Según encuestas, más del 60% de los uruguayos respaldan la medida, que fue presentada como un avance en la libertad y la autonomía personal frente al sufrimiento. No obstante, sectores conservadores, religiosos y algunas asociaciones médicas expresaron su preocupación por posibles abusos y por la insuficiente protección de personas en situación de vulnerabilidad. El Poder Ejecutivo cuenta ahora con seis meses para reglamentar la ley y establecer los protocolos médicos y éticos que regirán su aplicación. ⊕ Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina

Radar Inseguridad



Guatemala: La fuga de 20 reos vinculados a la pandilla Barrio 18 de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, descubierta recién después de dos meses, ha desatado una crisis política en el país. Las autoridades admiten que la evasión fue planificada, con apoyo interno y externo, y han abierto investigaciones que apuntan a funcionarios y guardias del sistema penitenciario. Los fugitivos pertenecen a una organización ya señalada como terrorista por EE. UU., lo que añade presión internacional para su pronta recaptura. La magnitud del escape, junto con la tardanza en detectarlo, ha provocado indignación ciudadana y cuestionamientos sobre el control del Estado sobre sus prisiones. El ministro de Gobernación fue blanco de críticas internas y llamados a su destitución, mientras se han despedido varios altos funcionarios penitenciarios. En respuesta, Estados Unidos exigió acciones contundentes y anunció cooperación con interrogatorios con polígrafo. La fuga revive

temores sobre la penetración del crimen en instituciones estatales, debilita la autoridad del Gobierno de Bernardo Arévalo y pone en evidencia la fragilidad de las cárceles de máxima seguridad ante redes criminales bien estructuradas. Además, deja al descubierto la capacidad de las maras para infiltrarse en los sistemas de seguridad y justicia, generando un desafío mayúsculo para el nuevo gobierno. La crisis carcelaria amenaza con convertirse en un test crucial para medir la eficacia y transparencia de la administración Arévalo frente al crimen organizado.

⊕ La fuga de 20 pandilleros de Barrio 18 de una cárcel de máxima seguridad desata una crisis en ...

Ecuador: Un juez fue asesinado a plena luz del día en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, poco después de dejar a su hijo en la escuela. Según la Policía Nacional, el magistrado fue interceptado por un sicario en motocicleta que le disparó en reiteradas ocasiones antes de huir. Las autoridades atribuyen el crimen a la banda “Los Lobos”, una de las más violentas del país, en medio de una ola de asesinatos vinculados al narcotráfico que azota la región costera. El juez, de 53 años, no contaba con protección oficial, y su muerte ha generado conmoción en el sistema judicial. El crimen se produce en un contexto de creciente violencia contra funcionarios públicos y operadores de justicia, con al menos 15 jueces y fiscales asesinados desde 2022. Solo en los primeros seis meses de 2025, los homicidios aumentaron un 47% en comparación con el año anterior, reflejando la expansión del poder de las organizaciones criminales. Ante esta situación, el gobierno ha intensificado el despliegue militar y policial en las zonas más afectadas, decretando nuevos estados de excepción. La Asociación de Magistrados ha exigido protección inmediata y una investigación independiente, mientras la población vive bajo un clima de miedo e impunidad creciente.

⊕ Escalada de violencia narco en Ecuador: asesinaron a un juez después de dejar a su hijo en la e...

Ecuador: El gobierno del presidente Daniel Noboa ha decidido desplegar 5.000 soldados adicionales para reprimir las manifestaciones que comenzaron hace más de tres semanas, como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel. Las protestas, lideradas en gran parte por comunidades indígenas y campesinas, han sido fuertemente reprimidas con disparos de munición real, bombas lacrimógenas y uso de fuerza en zonas residenciales, generando denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las calles de Quito, Guayaquil y Cuenca permanecen militarizadas, mientras continúan los bloqueos y la paralización del transporte. Las autoridades justifican el despliegue como necesario para despejar carreteras y garantizar el paso de convoyes humanitarios, pero organismos internacionales y medios locales alertan sobre una escalada de violencia con periodistas heridos y decenas de detenidos. Los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtieron que el gobierno está “criminalizando la protesta social” y exigieron un diálogo inmediato. A pesar de las críticas, Noboa insiste en mantener la medida, defendiendo que es clave para sanear las cuentas públicas, mientras su popularidad cae y el país se sumerge en una creciente crisis política y social.

⊕ El Gobierno de Noboa despliega 5.000 militares más para reprimir las protestas en Ecuador

Ecuador-Colombia: La captura de Rolando “Fede” Gómez, líder de Los Choneros, en una operación conjunta entre Colombia y Ecuador, reveló los planes de la banda para expandirse territorialmente en el negocio del narcotráfico. Según las autoridades, Fede operaba desde Medellín, con identidad falsa y escoltas, intentando negociar una alianza con el **Clan del Golfo** para abrir nuevos corredores de tráfico de drogas. El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía colombiana, señaló que el capo buscaba forjar alianzas multicriminales para consolidar rutas

trilaterales de estupefiantes. El arresto ha sido celebrado por el presidente Daniel Noboa como un golpe simbólico al crimen organizado, pues se suman 11 "objetivos de alto valor" capturados en los últimos dos años. Sin embargo, expertos alertan que la estructura criminal no está derrotada: tras la detención del anterior jefe, alias Fito, Los Choneros experimentan un proceso de reconfiguración, cooptando bandas menores para mantener su influencia. En Antioquia, la muerte de "El Ecuatoriano" - un enlace logístico entre Choneros y organizaciones locales- acentúa la preocupación por la infiltración ecuatoriana en Colombia. El señalamiento de que el arma logística se realiza en fincas, talleres de camuflaje vehicular y redes que conectan con la mafia albanesa añade una dimensión transnacional al conflicto. La alianza propuesta con el Clan del Golfo, que funciona como intermediario del cartel de Sinaloa, indicaría que Los Choneros aspiran a escalar posiciones dentro de la cadena del narcotráfico, no solo operando como fuerza local de violencia.

Los Choneros de Ecuador buscan extender su poder criminal en Colombia con el apoyo del Clan...

Chile: El gobierno anunció una querella por Ley Antiterrorista tras un violento ataque ocurrido la noche del domingo en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía, donde desconocidos incendiaron una camioneta en plena Ruta 5 Sur y dispararon contra otros vehículos, dejando dos personas heridas. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, explicó que este será el sexto recurso legal de esa naturaleza presentado por el Ejecutivo en la zona. Las autoridades califican el hecho como un acto terrorista, argumentando que la violencia empleada, la reivindicación expresada en un lienzo y el uso de armas de fuego contra personas favorecen ese tipo de calificación. El gobierno busca enviar una señal clara de que no tolerará la escalada de violencia en la Macrozona Sur. Las investigaciones revelaron que en el ataque se habría utilizado armamento de guerra: al menos **cuatro armas distintas**, incluyendo fusiles de calibre 5,56 y 7,62, lo que eleva la gravedad del hecho y refuerza la tesis de terrorismo. El ataque afectó varios vehículos, y los disparos alcanzaron parabrisas y carrocerías, provocando lesiones a una mujer y a un camionero por esquirlas. En el contexto de una zona bajo estado de excepción y creciente tensión, el gobierno ha decidido endurecer su enfoque legal frente a grupos radicalizados que operan en el territorio. Esta decisión ha reabierto el debate sobre la eficacia y los límites del uso de la Ley Antiterrorista en el conflicto mapuche. Paralelamente, se reforzará la presencia militar y policial en los puntos más críticos para prevenir nuevos ataques.

Gobierno anuncia querella por Ley Antiterrorista tras ataque en Ercilla - La Tercera

Chile: La violencia volvió a golpear con fuerza durante un fin de semana sangriento en Santiago y el sur del país, donde se registraron cuatro homicidios en menos de 24 horas y un nuevo ataque armado atribuido a encapuchados mapuches en La Araucanía. En la capital, dos asesinatos ocurrieron en la comuna de Conchalí, donde un hombre fue acribillado en plena calle, mientras que en Renca una joven de 20 años murió al recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento entre bandas rivales. En paralelo, en la comuna de Ercilla, los agresores bloquearon la Ruta 5 Sur, dispararon contra vehículos particulares y quemaron una camioneta robada, dejando dos heridos y un lienzo reivindicativo de la causa mapuche. Las autoridades calificaron ambos hechos como graves señales del avance del crimen organizado y la violencia rural. En Santiago, los fiscales investigan posibles ajustes de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico, mientras en el sur Carabineros reforzó los patrullajes en la Macrozona Sur tras los últimos atentados. El Gobierno condenó los hechos y prometió actuar con firmeza, aunque desde la oposición exigieron restablecer el estado de excepción. La población, golpeada por el miedo y la desconfianza, percibe una sensación de vulnerabilidad creciente. Los ataques, ocurridos casi simultáneamente en distintos puntos del país,

confirman que la inseguridad y la violencia se han convertido en el principal desafío interno que enfrenta Chile.

⊕ Fin de semana sangriento en Santiago de Chile: 4 homicidios en menos de 24 horas

Colombia: El atentado contra dos venezolanos exiliados en Bogotá ha sembrado terror dentro de la comunidad refugiada en el país. Los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche fueron baleados por sicarios frente a su residencia, resultando gravemente heridos y sometidos a varias operaciones. La agresión ha resucitado el miedo entre defensores de derechos humanos, periodistas y opositores que creían haber hallado seguridad tras huir de Venezuela. La embajada de Estados Unidos condenó el ataque y pidió una investigación exhaustiva para determinar si se trató de un crimen político. Las primeras pesquisas apuntan a una acción planificada: los atacantes usaron un vehículo vinculado al edificio de las víctimas y huyeron dejando armas en su interior. El gobierno colombiano prometió reforzar la protección a los exiliados, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre una creciente violencia transnacional y responsabilizan al régimen de Maduro. La incertidumbre sobre la capacidad del Estado colombiano para garantizar refugio seguro se ha intensificado entre quienes consideraban a Bogotá como un santuario, especialmente tras otros ataques recientes contra migrantes venezolanos.

⊕ El atentado contra dos venezolanos siembra el pánico entre los exiliados en Bogotá: "Pensábam...

Brasil: Un estudio del instituto “Sou da Paz” reveló que entre 2019 y 2023 se incautaron unas 7.000 armas de fuego en el sureste del país, y que entre ellas han crecido con fuerza las de tipo militar -rifles, ametralladoras y metralletas- utilizadas por bandas criminales. En esa región, las incautaciones aumentaron un 11,4%, mientras que a nivel nacional las cifras crecieron un 33,7%. Aunque esas armas siguen siendo minoritarias dentro del total de decomisos, su participación pasó del 1,7% al 2,4%, reflejando un salto preocupante en la capacidad de fuego del crimen organizado. Los investigadores advierten que la proliferación de armamento pesado eleva drásticamente el nivel de violencia y desafía la autoridad estatal. Estas armas, muchas de ellas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, se emplean para controlar territorios, resistir operativos policiales y disputar rutas del narcotráfico con grupos rivales. Gran parte del arsenal llega a través del contrabando internacional desde Estados Unidos, Alemania y Bélgica, lo que evidencia fallas en los controles fronterizos y en la fiscalización del comercio de armas. El fenómeno ha puesto en alerta al Gobierno de Lula da Silva, que evalúa endurecer la legislación sobre compraventa y trazabilidad. La tendencia apunta a una criminalidad cada vez más militarizada, con capacidad real de enfrentarse al Estado en varios frentes urbanos y rurales.

⊕ Alerta en Brasil por el auge de las armas militares en manos criminales: "Las de gran calibre son l...

Radar América Latina-Estados Unidos



Argentina-Estados Unidos: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condicionó la asistencia financiera a Argentina al resultado electoral del próximo 26 de octubre, advirtiendo que si el bloque del líder argentino Javier Milei no logra mantener o ampliar su presencia

legislativa, Washington no continuará siendo tan “generoso”. Esta declaración siguió al anuncio de un paquete de apoyo de hasta 20 000 millones de dólares, maniobra que marcó una intervención económica y política directa de EE.UU. en Buenos Aires, con el objetivo de frenar el derrumbe del peso y respaldar las reformas liberales que promueve Milei. La advertencia de Trump generó temores por la independencia económica del país y profundizó la incertidumbre en los mercados que ya atraviesan una crisis de liquidez. Los analistas señalan que el mensaje refuerza la polarización política argentina y plantea un escenario en el que la continuidad del respaldo externo depende tanto de factores internos como de la voluntad del Congreso de aprobar reformas clave. Esta combinación de presión electoral, condicionamiento externo y urgencia económica sitúa al gobierno de Milei en una posición de extrema vulnerabilidad, con poco margen para errores en las semanas que quedan hasta las elecciones.

⊕ Trump condiciona la asistencia para Argentina: qué le sucedería hoy al país sin la ayuda financiera...

Argentina-Estados Unidos: El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que la ayuda económica que Washington prepara para Argentina podría alcanzar los 40.000 millones de dólares, combinando una línea de crédito adicional de 20.000 millones con un swap de monedas del mismo monto. Según explicó, el paquete se articulará con bancos privados, fondos soberanos y garantías sobre activos argentinos, con el objetivo de reforzar las reservas internacionales, estabilizar el peso y respaldar los compromisos financieros del país. El anuncio, realizado tras la reunión entre Donald Trump y Javier Milei, fue interpretado como un gesto político y estratégico que consolida la alianza bilateral en un contexto global de alta competencia geoeconómica. Bessent precisó que el desembolso estará condicionado al mantenimiento de “buenas políticas económicas” y negó que Estados Unidos busque sustituir al Fondo Monetario Internacional como acreedor principal. Aun así, el anuncio tuvo impacto inmediato en los mercados financieros argentinos, con mejoras en bonos y acciones. No obstante, el paquete también reavivó el debate sobre la autonomía económica del país y las contrapartidas que podría implicar un respaldo de esta magnitud. Analistas destacan que la asistencia puede ofrecer un alivio a corto plazo, pero advierten que sin reformas estructurales profundas, la dependencia externa podría ampliarse y postergar la estabilidad sostenida que Argentina necesita.

⊕ Bessent anuncia que la ayuda de EE.UU. podría llegar a US\$40.000 millones

Brasil-Estados Unidos: Los cancilleres Mauro Vieira y Marco Rubio se reunieron en la Casa Blanca en un encuentro que marcó el primer paso hacia una negociación formal sobre los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a las exportaciones brasileñas. Vieira calificó la reunión de “óptima” y destacó su “tono constructivo”, subrayando que por primera vez Washington acepta revisar las medidas comerciales que desde agosto golpean a sectores clave como la carne y el café. El diplomático brasileño señaló que ambas partes trabajan para concretar una reunión entre Trump y Lula da Silva “en el corto plazo”, lo que simbolizaría el deshielo tras meses de tensiones entre ambas potencias. El tarifazo estadounidense -el más alto del mundo junto con el aplicado a la India- fue justificado por Trump como respuesta a lo que llamó una “caza de brujas” judicial contra su aliado Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años por intento de golpe de Estado. Washington también sancionó a magistrados del Supremo brasileño, lo que agravó la crisis bilateral. Brasil aspira a reducir los aranceles al 10% y busca ampliar el diálogo a otros temas sensibles como la situación en Venezuela, la regulación de las tecnológicas y las relaciones comerciales con China y Rusia. La diplomacia brasileña considera que el contacto directo entre Lula y

Trump podría abrir una etapa de distensión y reconstrucción de confianza entre ambos países tras la peor crisis en dos siglos de relaciones.

⊕ Una reunión entre los cancilleres de EE UU y Brasil abre el camino a negociar el ‘tarifazo’ de Trump

Venezuela-Estados Unidos: El presidente de los Estados Unidos afirmó que el líder venezolano le ha ofrecido “de todo” para evitar un conflicto con Washington, y explicó que esa disposición surge porque “no quiere meterse con Estados Unidos”. Según esa versión, entre las concesiones estarían el acceso a los recursos naturales venezolanos, contratos preferenciales y la reorientación de exportaciones petroleras que normalmente destinaban a otros actores globales. La declaración se enmarca justo cuando EE. UU. impulsa operaciones militares y de inteligencia en el Caribe, en una escalada que incluye ataques navales y el despliegue de fuerzas especiales. La tensión se intensifica porque estos ofrecimientos -que hasta ahora no han sido confirmados de forma independiente desde Caracas- se producen al mismo tiempo que Washington aumenta la presión contra redes de narcotráfico supuestamente vinculadas a Venezuela y moviliza tropas en zonas marítimas vecinas. Desde la capital venezolana se rechaza cualquier injerencia y se acusa a EE. UU. de preparar una estrategia de cambio de régimen, lo que convierte la situación en una combinación de negociaciones invisibles, amenazas militares y riesgo de escalada geopolítica.

⊕ Donald Trump dijo que Nicolás Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados U...

Caribe-Estados Unidos: Las fuerzas armadas estadounidenses realizaron un nuevo ataque en aguas del Caribe contra una embarcación que, según Washington, estaba vinculada al narcotráfico y operaba desde Venezuela. El gobierno de Trump afirmó que el objetivo era un “submarino artesanal” utilizado para el transporte de drogas, en lo que constituye la sexta operación de este tipo desde septiembre. Por primera vez en esta campaña se registraron sobrevivientes, lo que ha generado versiones encontradas sobre la naturaleza real de la embarcación y el número de víctimas. Fuentes militares indicaron que el operativo formó parte de una acción preventiva dentro de la estrategia de “seguridad hemisférica” que impulsa la Casa Blanca. La operación se enmarca en una ofensiva más amplia de Estados Unidos en la región, que incluye el despliegue de buques, aviones de combate y tropas en zonas cercanas a las costas del Caribe. Mientras la administración Trump sostiene que se trata de medidas contra redes criminales que amenazan la seguridad nacional, expertos y organizaciones humanitarias cuestionan la falta de pruebas sobre la existencia de un peligro inminente. Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció el ataque como una violación de su soberanía y del derecho internacional marítimo, advirtiendo que este tipo de acciones podrían aumentar la tensión y el riesgo de un incidente militar en la zona.

⊕ Trump confirma un ataque en el Caribe a un “submarino” al que acusa de transportar droga

Venezuela-Estados Unidos: En un clima de máxima tensión, Nicolás Maduro rechazó los intentos de “cambio de régimen” promovidos desde Washington y acusó a la CIA de impulsar golpes de Estado en América Latina, citando los casos de Chile y Argentina como advertencia. En un encendido discurso en Caracas, advirtió que “no podrán repetir esas estrategias fallidas en Venezuela” e instó al pueblo estadounidense a evitar “una guerra en el Caribe”. En paralelo, el gobierno venezolano refuerza la militarización interna y la retórica nacionalista, combinando exhibiciones de poder militar con llamados a la defensa de la soberanía frente a lo que considera una ofensiva imperial. La tensión escaló después de que Donald Trump confirmara que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, bajo el argumento de combatir redes de

narcotráfico y el supuesto envío de presos comunes hacia Estados Unidos. El mandatario estadounidense no descartó acciones terrestres, alimentando la alarma internacional. Caracas respondió calificando la medida como una “violación flagrante del derecho internacional” y convocó a los países latinoamericanos a un frente común contra lo que considera una nueva forma de intervencionismo. Mientras la retórica se intensifica, la región observa con preocupación una peligrosa espiral que combina la confrontación diplomática con el riesgo real de un incidente militar en el Caribe.

⊕ "Con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, pero el pueblo está unido": la respuesta...

Venezuela-Estados Unidos: Donald Trump declaró que su administración está evaluando autorizar ataques terrestres contra los carteles del narcotráfico en territorio venezolano, tras haber ordenado previamente la destrucción de varias embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas. Según el mandatario, “tenemos el mar bajo control y ahora estamos analizando seriamente actuar por tierra”, en lo que sería una escalada significativa de la política de seguridad regional. También confirmó que la CIA ha recibido autorización para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que marca un endurecimiento del enfoque militar hacia el régimen de Nicolás Maduro. Trump justificó estas medidas alegando que el gobierno venezolano habría liberado prisioneros y delincuentes para enviarlos hacia Estados Unidos, y acusó a Caracas de ser cómplice activo del narcotráfico. En su discurso, insistió en que “ningún país puede exportar criminales e intentar envenenar a la juventud estadounidense”. La declaración provocó una fuerte reacción del gobierno de Maduro, que calificó la amenaza como un acto de agresión y advirtió sobre “graves consecuencias” en caso de incursiones terrestres. La tensión bilateral se produce en un momento de creciente inestabilidad en la región, con choques diplomáticos entre Washington y Caracas y un endurecimiento de las sanciones financieras.

⊕ Donald Trump dijo que está evaluando autorizar ataques por tierra contra carteles de Venezuela

Venezuela-Estados Unidos: Donald Trump anunció la destrucción de una lancha vinculada al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, informando que seis personas murieron en el ataque. Según el presidente, la embarcación estaba conectada con redes de “narcoterrorismo” y transitaba por rutas conocidas de contrabando. Las fuerzas estadounidenses no registraron bajas y, según el Pentágono, la operación se llevó a cabo “en defensa propia”, al ser atacadas las patrullas que interceptaron la nave. La acción fue presentada por Trump como una “victoria de la justicia frente al crimen internacional”, en el marco de su política de mano dura en el Caribe. Este tipo de operaciones se enmarca en una estrategia más amplia que el mandatario denomina “guerra contra el narcoterrorismo”, centrada en destruir las rutas marítimas del tráfico de drogas y debilitar a los carteles que operan desde América Latina. La ofensiva ha elevado significativamente las tensiones con Caracas, cuyo gobierno acusa a Estados Unidos de violar su soberanía y actuar con motivaciones políticas. Mientras tanto, Washington refuerza su presencia militar en el Caribe y advierte que continuará con operaciones similares. La escalada confirma el giro hacia una política exterior más beligerante, donde la lucha antidrogas se mezcla con el objetivo de contener la influencia del régimen de Nicolás Maduro.

⊕ Trump anunció la destrucción de otra lancha vinculada al narcotráfico cerca de Venezuela: seis m...

Venezuela-Estados Unidos: Ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, los narcotraficantes están cambiando tácticas para evadir a los buques y aviones de Washington: usan embarcaciones más pequeñas y rápidas, multiplican los trasbordos en alta

mar y recurren a rutas menos vigiladas para evitar la detección. También fragmentan los cargamentos y emplean seúneos para confundir las patrullas. La intensificación de las operaciones - incluidas varias acciones letales ordenadas por la Casa Blanca- ha obligado a las redes a adaptarse, desplazando parte del flujo hacia puertos secundarios e islas periféricas. La presión estadounidense se combina con una mayor capacidad de interdicción de guardacostas locales, que en el último año reportaron incautaciones récord de cocaína, evidenciando un conflicto cada vez más sofisticado y dinámico. El resultado es un juego del gato y el ratón en el mar: cuando la Armada y la Guardia Costera concentran fuerzas en ciertas rutas, los traficantes reabren corredores alternativos o incluso trasladan la logística hacia rutas transatlánticas. Las operaciones estadounidenses, justificadas bajo el paraguas de la “guerra contra el narcoterrorismo”, han desatado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre su legalidad y proporcionalidad. Analistas advierten que la eficacia a largo plazo no dependerá solo de los golpes militares, sino de la cooperación judicial, el fortalecimiento institucional en los países del Caribe y Centroamérica, y de políticas que reduzcan la demanda y las finanzas

del

narcotráfico.

⊕ Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

Venezuela-Estados Unidos: En un giro dramático de la política hemisférica, la administración Trump impulsa una ofensiva militar y diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro bajo el paraguas de una “guerra contra las drogas”. Estados Unidos ha desplegado fuerzas navales en el Caribe para interceptar supuestas narcolanchas atribuidas al régimen venezolano y redefinido el narcotráfico como una cuestión de seguridad nacional. A la par, Washington ha suspendido los canales diplomáticos con el chavismo, elevado sanciones y reforzado el marco legal para actuar sin intermediarios internacionales, lo que convierte la confrontación en una estrategia explícita para forzar un cambio de régimen. La maniobra ha despertado fuertes preguntas sobre el “día después” en Venezuela y los riesgos de escalada regional. Si bien el gobierno de Maduro ha respondido con apelaciones al nacionalismo, denuncias de agresión externa y discursos de soberanía, analistas advierten que la estrategia de Trump busca legitimar medidas más agresivas bajo el pretexto antinarcóticos. Las acusaciones de que Maduro encabeza el llamado “Cártel de los Soles” y su vinculación con el Tren de Aragua son elementos centrales del discurso hegemónico. Esta tensión abre un capítulo inédito en la interdependencia entre doctrina antidrogas y cambio político en América Latina, con Venezuela como laboratorio del nuevo intervencionismo.

⊕ Una ‘guerra contra las drogas’ para cambiar un régimen: Trump y la diplomacia del cañonazo cae...

Venezuela-Estados Unidos: El dictador Nicolás Maduro ha decidido mantenerse en el poder “cueste lo que cueste” y reta abiertamente a Donald Trump a mover la siguiente ficha. En su entorno se da por descartada cualquier salida negociada, y se impone la lógica del pulso de fuerza. El chavismo interpreta los movimientos militares estadounidenses en el Caribe como una estrategia de presión más que como una antesala de invasión, y confía en que Trump no arriesgará un conflicto abierto con repercusiones imprevisibles. En Miraflores se comenta la existencia de informes que desaconsejan una acción bélica directa, lo que refuerza la convicción interna de resistir. Maduro, atrincherado en el poder, busca proyectar control y fortaleza frente a un escenario internacional cada vez más adverso. El oficialismo ha blindado la cúpula militar y reforzado su alianza con Rusia e Irán, al tiempo que despliega una narrativa de soberanía y resistencia ante lo que califica de “agresión imperialista”. Internamente, el Gobierno apuesta por mantener la disciplina en las filas del Partido Socialista Unido y apelar al nacionalismo para consolidar apoyo. La oposición, debilitada y

fragmentada, observa con frustración cómo se cierran las posibilidades de negociación. En este tablero de alta tensión, cada movimiento parece calculado para prolongar el statu quo, mientras la población sigue atrapada entre la asfixia económica, la censura y la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país. ☺ “Maduro ya lo decidió, no se va a ir. Ahora le toca mover ficha a Trump”

Caribe-Estados Unidos: El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, iniciará una gira por Granada y Antigua y Barbuda con el objetivo de reforzar la cooperación en seguridad y enfrentar el crimen organizado en el Caribe. Se prevén reuniones clave con los primeros ministros locales y autoridades de defensa y policía para tratar temas como el narcotráfico transnacional y la seguridad fronteriza. La visita llega justo después de que Washington solicitara instalar equipos de radar temporales en el aeropuerto de Granada, lo que genera debates sobre la soberanía local y el papel militar de Estados Unidos en la región. En un contexto marcado por las crecientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, la presencia del Comando Sur busca consolidar alianzas estratégicas con los pequeños Estados insulares. Granada, miembro de la ALBA y aliada tradicional de Venezuela, ha recibido críticas por la solicitud estadounidense, que algunos analistas perciben como una estrategia de presión indirecta sobre Caracas. Voces locales han denunciado que la medida podría abrir paso a una intervención encubierta en la región. Por su parte, el Gobierno granadino insiste en que cualquier decisión respetará su soberanía y responderá al interés nacional. En ese contexto, la gira de Holsey se interpreta también como una demostración de fuerza diplomática y estratégica de Washington frente a la influencia rusa y china en el Caribe. Además, refuerza la idea de que el Caribe se ha convertido nuevamente en un tablero clave dentro de la competencia geopolítica hemisférica.

☺ El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones...

Bolivia-Estados Unidos: En vísperas de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga buscan “relaciones sólidas y mejores” con Estados Unidos, subrayando que el país enfrenta una oportunidad de cambio tras años de vínculos tensos con Washington. Donald Trump respaldó esas declaraciones, asegurando que “la nueva generación de líderes bolivianos entiende la importancia de trabajar con Estados Unidos para el desarrollo y la seguridad regional”. Rubio destacó que ambos aspirantes mantienen posturas promercado y favorables a la inversión extranjera, lo que podría abrir la puerta a una nueva etapa de cooperación bilateral. En respuesta, Evo Morales denunció las afirmaciones como una injerencia directa en el proceso electoral boliviano y advirtió sobre una “vuelta al tutelaje estadounidense”. El Departamento de Estado defendió su posición, insistiendo en que solo busca fortalecer los lazos económicos y democráticos en la región. Analistas coinciden en que la Casa Blanca ve en Bolivia una oportunidad estratégica para recuperar influencia en Sudamérica tras el deterioro de relaciones con varios gobiernos de izquierda.

☺ El Gobierno de Trump afirma que Paz y Quiroga buscan “relaciones sólidas y mejores” con Estados...



Contacto

 @zovatto55

 latamasesoria@latamae360.com

 www.linkedin.com/in/danielzovatto360